

SESIONES PÚBLICAS DE BALANCE Y PERSPECTIVAS

PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA SESIÓN: ACCIÓN POPULAR 10 DE JUNIO DE 2003 P.M.

Señor Luis Enrique Gálvez

Señor Presidente, señores Comisionados. En mi calidad de Secretario General Nacional de AP, me veo en la necesidad de señalar que nuestra presentación en esta sesión pública no responde a que aceptemos los términos en que hemos sido invitados. Con todo respeto no aceptamos estos términos, pues no es verdad que hayamos sido actores institucionales que tuviéramos que ver directamente con un conflicto armado como se indica en el documento que nos cursaran con tal propósito. Nuestra presencia responde al deseo de honrar la memoria de nuestro Jefe y fundador, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry; y de ser fieles al principio de veracidad que inspira nuestra ideología. Es fácil dejar constancia de que no participamos en ningún conflicto armado por el sólo hecho de que, a diferencia de otras organizaciones, nosotros los de AP jamás nos armamos para combatir a nuestros adversarios políticos, siempre primó en nosotros la razón antes de la fuerza. Tanto es así, como habrán podido ustedes constatar señores Comisionados, que las dos veces que el terrorismo atacó nuestro local central de Paseo Colón, nuestros militantes cayeron sin poder ofrecer resistencia alguna, precisamente, porque se encontraban inermes.

Por eso, tampoco aceptamos lo que sería una conclusión adelantada por la CVR al haber emitido un pronunciamiento público en el que, refiriéndose a la organización a la que pertenecen estos terroristas, dice que para conocer a profundidad el proceso de violencia que vivió el país y prevenir su reaparición es necesario reconocer que SL es un partido político. ¿Qué tiene que ver lo político con el crimen? Si ustedes, señores Comisionados, se cuidan tanto de usar el término violencia política por considerarlo un contrasentido, más deberían hacerlo de usar el término partido político para referirse a quienes se organizan para destruir el sistema democrático y asesinan para tomar el poder. Permítasenos discrepar sustancialmente de la conceptualización que viene realizando vuestra Comisión de los hechos cuyo esclarecimiento se les ha encomendado. Una cosa es exponer los hechos constatados y otra muy distinta es pretender interpretar tales hechos dentro de un marco ideológico, que democráticamente respetamos pero que no compartimos ni se nos puede obligar a hacerlo.

Señor Presidente, como dijimos en la primera reunión privada que sostuvimos, los de AP hemos sido víctimas y no victimarios en esa ola de violencia que produjeron quienes importaron al Perú la tesis apocalíptica de la violencia como partera de la historia. Venimos pues a sostener la verdad, que no es otra cosa que la coincidencia entre lo que decimos y lo que sabemos o pensamos.

«El poder nace del fusil». Esa frase se encontraba en las aulas cuando ingresé a la universidad a inicios de 1976 en plena dictadura militar cuando tenía aún dieciséis años de edad. Era común por aquella época, ver los enfrentamientos de quienes se acusaban mutuamente de revisionistas o infantilistas. Argumentando cada uno a su modo, si estaban o no dadas las condiciones para iniciar la lucha armada, para lo cual había que acentuar las contradicciones del sistema democrático burgués. Paradójicamente, era un gobierno militar el que parecía no saber qué hacer frente a quienes manifiestamente se preparaban para iniciar su guerra popular. Se hacía gala de la fuerza pero todo seguía igual. Algunos sostenían en muchas esferas que debido a la pobreza era justificable hacer uso de la violencia para instaurar un nuevo orden, pero estas ideas a veces primaban en los pareceres incluso académicos de los claustros universitarios: «Salvo el poder todo es ilusión». Era grande la tentación de llevar esas teorías a la práctica, se admiraba a quienes durante el anterior régimen democrático de los años sesenta, habían tomado las armas y muerto en combate. Eran mártires que debían ser emulados. Para ellos, en las serranías, el campesino empobrecido estaba dispuesto a involucrarse por su causa y sólo faltaba la decisión de una vanguardia que le señale el camino.

No perdimos por suerte la ilusión de que las cosas podían ser distintas, y recorriendo las serranías encontramos un pueblo pobre pero generoso. Ahí conocimos a Belaúnde en su campaña presidencial, escuchamos el mensaje de fe en nuestra patria; su historia, su gente, su geografía, sus tradiciones milenarias así lo demostraban. Recusaba Belaúnde con firmeza a quienes habían importado ideologías en un país rico en ideas, a quienes querían enfrentar a unos contra otros cuando el pueblo peruano era el

ejemplo de trabajo por el bien común; negaba toda posibilidad de recurrir a la violencia cuando lo que se requería era trabajo, sudor, mas no sangre.

Abrazamos pues con fervor esa tesis que hoy, tras una larga militancia, me lleva a presentarme aquí en representación de AP para decir la verdad. Jamás hemos practicado la violencia ni alentado el uso de ella para agredir a nadie. Si algo ha practicado AP es la ley de hermandad, aquella tradición milenaria que recogió Belaúnde al ver la importancia del trabajo comunitario en las serranías, en Chincheros cuando iba camino a Ayacucho. Por eso, en su gobierno se preocupó tanto por aquellos pueblos que habían sido olvidados, y en las innumerables obras que se hicieron por cooperación popular se consigno siempre la frase: «El pueblo lo hizo». Sería largo enumerar las obras de desarrollo que durante los dos gobiernos de AP se hicieron en las zonas donde iniciaron sus acciones los terroristas. Y sin dudarlo hubiéramos querido hacer muchas más, baste con mencionar la Vía de los Libertadores y las innumerables carreteras que se hicieron para mejorar la infraestructura vial y acercar a los productores agrícolas a los mercados. A pesar de la destrucción subversiva, el Perú siguió construyendo. «Trabajar y dejar trabajar» fue el mensaje en nuestra campaña; sin embargo, en 1980 la sociedad peruana en su conjunto fue agredida por el terrorismo que se había venido incubando desde años atrás. Le cupo entonces a nuestro gobierno defenderla constitucionalmente con el uso de la fuerza pública.

Lamentamos profundamente las secuelas de ese enfrentamiento que tanto dolor ha causado y que ha enlutado a tantas familias y, por supuesto, a muchos de nuestros militantes. Es deber de todos reflexionar sobre los hechos, no pretendamos imponernos unos a otros nuestra propia visión sobre sus causas, nuestros diferentes modos de pensar pueden llevarnos a tener apreciaciones distintas en su aspecto sociológico. Lo concreto, lo que reclama el país es que aquí y ahora, nos hagamos la firme promesa de impedir que eso se repita, renunciando para siempre a la violencia. AP asume ese compromiso.

Doctor Salomón Lerner Febres

Agradecemos su intervención al señor Luis Enrique Gálvez y sedemos la palabra al señor Edmundo del Águila.